

Martin Diskin Memorial Lecture, Chicago, 24 de mayo de 2014

por ALBERTO J. OLVERA RIVERA

Es un gran honor para mí recibir el premio Martin Diskin Memorial Lectureship, instituido en honor de un gran antropólogo comprometido con la justicia en Centroamérica y practicante convencido de la investigación activista. Saber que este reconocimiento ha sido otorgado anteriormente a personalidades tan importantes del mundo académico y del activismo civil en América Latina y en Estados Unidos (y cito ahora sólo a los que me resultan cercanos), como Claudia Paz y Paz, extraordinaria abogada y fiscal guatemalteca que recientemente fue depuesta de su cargo por su valor para llevar a juicio y condenar por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt; el gran sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (inspiración de muchos de los aquí presentes); Jonathan Fox, activista en favor de la transparencia y la rendición de cuentas a nivel internacional, y quien ha apoyado a México toda la vida; los mexicanos Rodolfo Stavenhagen y Rosalva Aida Hernández, quienes han mantenido un largo activismo en favor de los derechos de los pueblos indígenas; Carlos Iván Degregori, uno de los grandes intelectuales peruanos, y a quien recordamos hoy aquí; y Terry Karl, gran intelectual y decidida luchadora a favor de los derechos humanos en Guatemala y El Salvador. En verdad que frente a ellos me siento empujado porque mi misión en la vida ha sido menos visible y trascendente que la de las personas que me han antecedido en este premio. Como profesor de una universidad pública de provincia en México, la Universidad Veracruzana, y como activista civil con fuerte implantación local, la visibilidad de mi trabajo en un país tan centralizado como el mío es mucho menor a la que normalmente tienen los intelectuales y activistas que viven y participan en redes en la ciudad de México, o de manera similar, en las capitales nacionales en otros países de la región. Esta circunstancia sin duda

afecta el conocimiento que de nuestro propio trabajo tienen los colegas nacionales e internacionales. El otorgamiento del premio a quien les habla es un hecho casi inédito para un país que no suele mirar a sus regiones ni pensarse desde ellas, con contadas excepciones históricas. En ese sentido, quiero compartir este premio con las decenas de intelectuales y activistas que desarrollan un trabajo callado pero fundamental en la provincia mexicana.

Quiero agradecer a Oxfam América por apoyar este premio. Reconozco la importancia del trabajo que esta organización generosa desarrolla en el mundo combatiendo la pobreza y la injusticia, y también porque ha mantenido como principio a lo largo de su historia su autonomía política respecto del gobierno de su país. Este es un valor importantísimo, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Agradezco a LASA, la asociación la cual pertenezco desde hace 22 años, por tener la capacidad para integrar jurados para éste y otros premios, que son plurales, con presencia de intelectuales tanto norteamericanos como latinoamericanos, y que han demostrado a lo largo de los años una notable independencia de criterio y una disposición para ampliar los horizontes del reconocimiento del trabajo académico y del compromiso cívico.

Quisiera hacer ahora algunas reflexiones sobre mi propia trayectoria personal, que me parece ilustran los problemas tanto teóricos como prácticos que plantea la democratización mexicana y al mismo tiempo explican la naturaleza de mi propia experiencia en la investigación activista. Yo pertenezco a la generación post-1968, que realizó sus estudios universitarios a fines de los años setentas en el contexto de un enorme activismo estudiantil y de la más grande movilización social de la segunda



Alberto Olvera Rivera is honored with the LASA/Oxfam America Martin Diskin Memorial Lectureship by Rosalva Aida Hernández

mitad del siglo XX. Para mi generación el activismo estudiantil fue casi natural, pero a diferencia de los estudiantes de la Universidad Nacional (UNAM), los de provincia teníamos que luchar contra un enemigo interno en las universidades: el llamado “porrismo estudiantil”, es decir grupos de jóvenes contratados por el gobierno para amenazar violentamente a los activistas y evitar su movilización crítica. La lucha por abrir espacios de libertad dentro de las universidades públicas de provincia fue muy desigual y tuvo lamentablemente pocos efectos. La política del régimen autoritario consistió en tolerar islas de crítica sólo en tanto éstas no contaminaran al conjunto de las instituciones. Una política de aislamiento de la izquierda, combinada con la clásica política de cooptación, fue instrumento eficaz para controlar a las universidades, pero al costo de degradar sus fundamentos académicos y morales. Lamentablemente, este argumento aplica también para las universidades que fueron controladas por la izquierda desde fines de los años setenta: Guerrero, Sinaloa y Oaxaca, así como las de Puebla y Zacatecas, que lo fueron por menos años, ya que los grupos que las dirigieron no privilegiaron las labores académicas y se entregaron a distintas formas de politización interna que no ayudaron ni al conocimiento ni a los movimientos populares. En general, la

forma de control corporativo, vía privilegios administrados a los trabajadores del sector público, en especial en la educación, fue políticamente eficaz para el régimen, pero catastrófica para el país, pues su efecto fue destruir la ética laboral al premiar la lealtad política e ignorar el desempeño profesional.

Tuve la suerte de egresar de la licenciatura en una época de acelerada expansión de las universidades. Mi generación encontró empleo rápidamente, algunos de nosotros en la propia universidad. Estudié economía, pero por accidente empecé mi carrera como historiador sin tener la formación ni el entrenamiento para ello. Aprendí sobre la marcha conforme estudiaba a los trabajadores petroleros de la época de la nacionalización de la industria petrolera, a fines de los años 30 del siglo XX. Esta experiencia me permitió tener una visión crítica de eventos fundamentales de la historia mexicana, al mismo tiempo que me sorprendía el contraste entre la calidad de los debates internos, la radical autonomía de los líderes sindicales de la época y el triste presente de un sindicalismo corrupto y autoritario en la empresa petrolera nacional. Mi trabajo no resultó muy popular en esos tiempos, pues critiqué ciertas interpretaciones de la heroicidad obrera que no necesariamente reflejaban la realidad mucho más compleja y difícil del mundo del trabajo. La nacionalización petrolera se convirtió desde los años 40 en una narrativa oficial hegemónica que no admitió cuestionamientos. Comprender cómo se produce una cultura laboral, cómo se experimenta la vida sindical, cómo se entiende al Estado desde el lugar de trabajo, y el análisis desde la perspectiva de los trabajadores de base de los grandes momentos de transformación histórica, fueron mis aportes en este campo.

En mis años tempranos como académico trabajé también como asesor de la Unión de Productores de Café de Veracruz, una organización campesina novedosa en cuanto tenía como principio su autonomía política del Estado y evitaba concentrar el poder en los líderes y asesores externos del movimiento. La Unión tenía su base en el centro de Veracruz, el segundo estado productor de café más importante de México, y de esta experiencia de varios años de trabajo directo con las comunidades campesinas aprendí mucho acerca de la cultura y de la capacidad organizativa, discursiva y política de los campesinos. Esta experiencia, sumada al conocimiento que me había dado el estudio del sindicalismo petrolero, me convenció de que en los movimientos populares hay siempre potenciales Emilianos Zapata, que no logran convertirse en grandes líderes nacionales por la ausencia de condiciones históricas favorables. Mi asombro ante la capacidad deliberativa y el valor político de muchos de estos trabajadores y estos campesinos sigue vigente hasta la fecha, así como también mi frustración por la impotencia colectiva para contrarrestar las estrategias del régimen autoritario, tan sabias en su capacidad de desgaste y cooptación de los movimientos populares. Reconozco que los activistas tuvimos también responsabilidad por el progresivo debilitamiento del movimiento cafetalero, pues nuestros proyectos políticos no necesariamente eran comprendidos por las bases y nuestras estrategias no se adaptaron con la suficiente rapidez a las condiciones específicas de cada coyuntura. La sostenibilidad en el tiempo de un movimiento popular es un reto político formidable. Por cierto, escribí poco de esta experiencia, y esta es una de mis grandes deudas con los campesinos de mi región.

Al mismo tiempo, en esos años ochenta, una década de crisis terrible en mi país,

participé con diversos colegas en un intento de democratizar el sindicato de trabajadores académicos de mi universidad y la universidad misma. En esa época, por primera vez en la historia, los trabajadores académicos nos movilizamos en reclamo de mejores salarios y de reconocimiento profesional de nuestra labor. En esos años los salarios reales cayeron dramáticamente y el sindicato autoritario asignaba categorías a los profesores de manera discrecional y arbitraria. Nuestro intento democratizador terminó en la expulsión de 19 profesores del sindicato académico, yo mismo en primer lugar, pero las autoridades y los líderes sindicales no nos pudieron despedir de la Universidad porque era legalmente difícil y políticamente riesgoso. Esta derrota nos enseñó que las instituciones universitarias son sumamente conservadoras y difíciles de cambiar, sobre todo una universidad pública estatal como la mía, que en esa época ni siquiera gozaba del estatuto de autonomía, por lo que el gobierno tenía un control político total. No obstante, logramos una pequeña victoria cultural, pues muchos profesores jóvenes asumieron una actitud crítica frente al autoritarismo, que después ayudaría a una progresiva academización de la universidad y a lograr, apenas hace 16 años, la autonomía de la institución.

De forma tardía para una carrera académica normal, pude realizar mis estudios de maestría y doctorado en la New School for Social Research entre 1989 y 1993, gracias a una beca Fulbright-LASPAU y otra de la propia New School. En esa época descubrí la sociología y la ciencia política, campos que siempre había querido estudiar. Era un marxista autodidacta, y me encontré de pronto leyendo con asombro a Weber, a Habermas y a tantos otros gigantes del pensamiento filosófico, sociológico y político. Aprendí mucho sobre los procesos de

democratización a partir de las lecturas de O'Donnell, Schmitter, Stepan y otros. Tuve la enorme fortuna de recibir clases de Eric Hobsbawm, Agnes Heller, Claus Offe, Andrew Arato, Charles Tilly, William Roseberry, Sheila Benhabib, José Casanova y varios otros formidables profesores. Asistí a muchas conferencias y debates sobre la caída del Muro de Berlín, sobre las transiciones a la democracia en América Latina y Europa Oriental, y de pronto sentí que por primera vez pertenecía al mundo, que era parte de él. Adquirí nuevos intereses académicos, ante todo la preocupación por la emergente sociedad civil, por las transiciones a la democracia, por las implicaciones globales y locales de la caída del Muro. Pero además, tuve la inmensa fortuna de ser parte de una generación de estudiantes latinoamericanos de los cuales aprendí tanto como de la propia escuela. Especialmente he compartido preocupaciones, conocimientos y experiencias con mi amigo de buena parte de la vida, Leonardo Avritzer, y con mi no menos querido Enrique Peruzzotti. Agradezco la presencia de ustedes y de varios otros compañeros de viaje aquí, y aprovecho para manifestarles a todos mi amistad y mi agradecimiento por lo que me han enseñado.

Al regreso a mi universidad, me dediqué profesionalmente a investigar la relación entre la sociedad civil y los procesos de democratización en mi país, participando de lleno en el proceso como activista civil, y compartí esta experiencia con una generación de intelectuales y activistas que trabajaban en el mismo proyecto. Ya desde 1988 México experimentó grandes protestas civiles por el fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas. Antes de irme a Estados Unidos fundé, junto con mis colegas universitarios, el Foro Cívico Xalapeño, organización civil que protestó contra el fraude, y fui, como

miles y miles de mexicanos, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática en 1989, partido que pronto habría de decepcionarnos a muchos, de manera que en 1993 decidí no renovar mi membresía partidaria, aunque seguí votando por el PRD a falta de mejores alternativas. Con ese bagaje a cuestas, participé de lleno en las luchas por la democracia electoral desde 1994, lo cual me llevó a ser parte de la Dirección Nacional de la Alianza Cívica (1994–2000), un movimiento prodemocrático de carácter nacional, que propuso y desarrolló nuevas formas de control democrático de los ciudadanos hacia el Estado, particularmente la observación electoral, un instrumento que fue importante en la época de creación y consolidación de las leyes e instituciones electorales de mi país. La Alianza Cívica también realizó consultas populares, ofreció su solidaridad al movimiento zapatista y desarrolló las primeras formas de exigencia legal de rendición de cuentas y transparencia. Estos años fueron importantes para mí no sólo desde el punto de vista académico, sino también político, pues mi participación en la Alianza me permitió conocer mejor mi propio país y compartir de viva voz la experiencia de múltiples activistas civiles que trabajaban en condiciones sumamente complejas y difíciles en los estados de la República. Trabajé además con la élite de la sociedad civil mexicana, los líderes de organizaciones no gubernamentales, también llamadas organizaciones civiles, que encabezaban los esfuerzos democratizadores.

Sin duda, la investigación activista permite no sólo la realización personal de un compromiso político, sino un nivel de conocimiento imposible de alcanzar desde la perspectiva del observador, un conocimiento íntimo que permite ver también los errores y límites de los

movimientos. Sin embargo, mi experiencia indica que la mayoría de las veces, los investigadores-activistas guardan sus críticas por considerar que hacer públicas sus opiniones personales puede ser políticamente inconveniente. Difiero de ese criterio. Creo que la crítica solidaria es absolutamente necesaria para los movimientos. En lo particular, critiqué el centralismo de Alianza Cívica, su incapacidad para convertir los problemas locales en temas nacionales, los éxitos locales en ejemplo nacional. Critiqué también el prejuicio antipolítico (que yo compartía) que dominaba el ambiente de las organizaciones civiles, temerosas de la cooptación por el gobierno y los partidos. Este temor era por cierto justificado, pero condujo a la parálisis política en momentos críticos, sobre todo después de la alternancia. Vencer el miedo al debate franco al interior de la sociedad civil y de la academia es todavía una tarea no completada.

Mis estudios y los de otros colegas sobre el papel de la sociedad civil en México permitieron darle visibilidad a la sociedad en un proceso de transición que desde 1989 se veía monopolizado por los partidos políticos, tanto establecidos como emergentes, los cuales sistemáticamente ignoraban a la sociedad civil. Esto era paradójico, pues la creación de las instituciones electorales mexicanas, particularmente del Instituto Federal Electoral (IFE), que a partir de 1997 se convirtió en una especie de referente internacional de institucionalidad autónoma en materia electoral, fue un producto indirecto de la gran movilización por la democracia que tuvo lugar en México desde principios de los años noventa hasta el año 2000. Los fundamentos morales y legales del IFE, ante todo la autonomía política, la profesionalización y la dirección colectiva

por parte de personajes independientes de los partidos, fueron propuestos por el movimiento civil prodemocrático. Lamentablemente, el movimiento no tuvo la capacidad de influir ni en la agenda ni en las prácticas de los partidos políticos, quienes a partir del momento en que pudieron usufructuar el generoso financiamiento público previsto en las nuevas leyes electorales, radicalizaron sus tendencias a la autorreferencialidad y se tornaron en simples maquinarias políticas cuyos vínculos con la sociedad fueron fundamentalmente clientelares. Por cierto, debe añadirse aquí que, como bien ha señalado Guillermo Trejo, el movimiento zapatista fue un factor decisivo en la decisión del régimen autoritario para permitir elecciones más o menos libres, dado el temor que en su interior suscitó el espectro de la movilización popular.

A partir de 1998 tuve la oportunidad de participar en varios proyectos que impulsó la Fundación Ford, en primer lugar en un gran proyecto internacional comparado sobre la sociedad civil y la gobernabilidad en el mundo. A través de esta experiencia, pude ampliar mi horizonte de conocimiento de los movimientos sociales locales, regionales y nacionales y su papel en los procesos de democratización. Como responsable del estudio de México, este proyecto me permitió continuar y profundizar el conocimiento de la sociedad civil mexicana en su enorme complejidad. Este trabajo reforzó mi crítica a la idea dominante, tanto en círculos académicos como civiles, de que la sociedad civil se limitaba en México a las ONGs y los movimientos prodemocráticos urbanos. Uno de los problemas que hemos tenido en mi país ha sido el no entender la naturaleza plural y heterogénea de la sociedad civil, incomprensión que condujo a una forma primaria de entender la dualidad entre sociedad civil y Estado: la sociedad civil es

el polo de la virtud y el Estado es el polo de la maldad, idea que criticara acertadamente hace años mi colega Evelina Dagnino. Esta arraigada incomprensión ha logrado ser atenuada lo largo de los años, de muchos debates y de la dura experiencia de la realidad de una democratización frustrada. En el libro colectivo que edité con Evelina Dagnino y Aldo Panfichi, llamado *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, se presenta una síntesis y crítica de los debates que en los años noventa y primeros del nuevo siglo se dieron en torno a la naturaleza del papel de la sociedad civil en el proceso de democratización. La conclusión principal fue que esta dicotomía polar entre sociedad civil y Estado era errónea, como lo son los conceptos que homogeneizan a la sociedad civil y al Estado. Es precisamente la naturaleza compleja y heterogénea de esas dos entidades lo que nos obliga a entender la democratización como un proceso de co-construcción de un Estado democrático de Derecho y de una sociedad civil democrática. Se trata de un proceso que no tiene un ritmo estable, sino que se caracteriza por altas y bajas, avances y retrocesos. Sin duda las experiencias de cada país de América Latina son distintas y es por ello que no se puede establecer un modelo ideal del proceso, en el cual están en disputa distintos proyectos políticos. Lo cierto es que esa co-construcción exige mediaciones funcionales entre la sociedad y el Estado. En el nivel programático-ideal (proyectos) se ubica un plano necesario de confluencia de intereses y visiones; en las trayectorias personales de líderes civiles y políticos se pueden detectar las migraciones de liderazgos y proyectos entre la sociedad y el Estado. Pero la estabilización de los potenciales de alianza entre sectores de la sociedad civil y el Estado requiere de la mediación de partidos políticos y de la construcción de instituciones, tanto formales como informales, de participación

y deliberación. Esto ocurrió, por ejemplo, en varias ciudades de Brasil en los años noventa gracias a una nueva constitución democrática, la existencia del Partido de los Trabajadores y los cientos de experimentos participativos desarrollados en colaboración entre gobiernos locales y movimientos sociales, como bien lo ha demostrado Leo Avritzer en sus libros. Esta confluencia de actores y procesos es excepcional y no dura para siempre. Donde no hay los actores ni las condiciones históricas apropiadas, la transición se limita al espacio electoral y no da lugar a un verdadero proceso de construcción democrática, como es el caso prototípico de México.

Al entusiasmo inicial por la democracia electoral ha seguido en varios países, pero especialmente en México, un profundo desencanto con esa democracia tan difícilmente ganada, y tan fácilmente descarrilada por los intereses de una clase política muy poco democrática y de escaso nivel intelectual y moral. En otro libro que edité, *La democratización frustrada*, se habla precisamente de cómo los avances jurídicos e institucionales en la democratización mexicana han sido vaciados por una clase política que tiene como estrategia la colonización de todos los espacios de participación ciudadana y de las instituciones garantes de derechos y de participación. Este fracaso de la democratización entendida como un proceso de construcción de un Estado democrático de Derecho coincide en el tiempo con un debilitamiento de los distintos sectores de la sociedad civil mexicana, los que, de una forma u otra, fuimos víctimas de una esperanza desproporcionada en los potenciales de la democracia electoral. Por el contrario, en los años de la alternancia política, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional, se ha vivido la progresiva fragmentación

del poder político, la descomposición del tejido social y el colapso moral de la clase política, en un ambiente de creciente violencia criminal que un Estado incompetente y en parte coludido con los poderes fácticos ha sido incapaz de controlar. Coinciden así una crisis de representación política y social, una crisis de seguridad que en realidad es una expresión de la crisis del Estado, y un prolongado estancamiento económico, todo lo cual crea una sensación de desaliento. Se ha desperdiciado una oportunidad histórica única para llevar a cabo un verdadero proceso de democratización, de lo cual son culpables por igual una clase política que no estuvo a la altura de los retos y una sociedad civil demasiado débil en términos sociales, organizacionales e intelectuales. Y de esto somos corresponsables los académicos-activistas por no ser capaces de incidir de manera más decisiva en la vida política.

En años recientes muchos académicos mexicanos nos tornamos, por la fuerza de las circunstancias, y por la necesidad de entender lo que le pasa al país, en estudiosos, aun principiantes, de la violencia, la inseguridad y la injusticia. Mis trabajos recientes van en esa dirección, y debo decir que he entendido mejor la increíble debilidad del Estado en mi país. Acostumbrado a pensar, como todos los mexicanos, que el Estado era casi omnipotente, y concentrado, por otra parte, en analizar y acompañar a la sociedad civil, debo reconocer que había perdido la perspectiva del Estado. Al estudiar las entrañas de las instituciones de seguridad y justicia se descubren vacíos gigantescos, aparatos vaciados de institucionalidad, de sentido ético, de mínimos estándares profesionales, penetrados hasta la médula por intereses criminales. La precariedad del Estado es, del otro lado de la moneda, la vulnerabilidad extrema de la ciudadanía.

La angustiosa pregunta que nos hacemos hoy los mexicanos es si la mediocre clase política que debemos tolerar es capaz de la hazaña de construir el Estado en medio del desastre.

Por fortuna, la resistencia sigue y los años recientes no se han perdido del todo. Se han logrado avances legales e institucionales relevantes en materia de acceso a la información y reconocimiento, protección y garantías de los derechos humanos; se ha iniciado también una reforma de la justicia, si bien todo ello de manera incipiente. Han surgido movimientos sociales adecuados a la necesidad urgente de construir instituciones democráticas funcionales, sobre todo desde la perspectiva de la contraloría ciudadana. Se han multiplicado en varias partes del país los observatorios de toda índole, especialmente aquellos dedicados a los derechos de ciudadanía y a las políticas urbanas, la calidad de los gobiernos locales y la calidad de la democracia en general. Se han llevado a cabo múltiples estudios y creado instituciones civiles que avanzan sobre la tarea central de la transparencia y el acceso a la información. Movimientos sociales populares de toda índole se multiplican en el país, sea en defensa de los bienes comunes contra la voracidad extractiva, sea en defensa de la vida contra la delincuencia organizada, sea contra tantas formas que toma la injusticia en la vida cotidiana. En el ámbito legal, se ha entendido la importancia del litigio jurídico para poder consolidar las instituciones democráticas. En ese carácter me precio de participar en el Consejo Directivo de Fundar, una ONG de investigación integrada por jóvenes comprometidos con la democracia y la justicia, que desarrolla precisamente la agenda de litigio estratégico por derechos y proyectos diversos en el campo de la transparencia y el derecho a la información.

Es importante decir que al otorgárseme este premio, se reconoce de facto la importancia del activismo en terrenos que no necesariamente son considerados heroicos en lo público, sino que son propios del trabajo cotidiano de largo plazo y de la persistencia de una actitud crítica en la vida. En lo personal, junto a esta tarea académica y de activismo que he tratado de reseñar, también he sido un intelectual público, a través de muchos años de escribir en las páginas editoriales de diversos periódicos locales y nacionales, de otorgar entrevistas a los medios de comunicación locales y nacionales y de ofrecer innumerables conferencias a públicos académicos y civiles por igual. En ese carácter, me ha tocado experimentar también la intolerancia y el autoritarismo, los cuales no se limitan únicamente a los espacios institucionales. Los medios de comunicación mexicanos están extraordinariamente cercanos al poder e incluso los medios críticos viven una condición económica precaria y requieren algún tipo de financiamiento público no siempre transparente y muchas veces no legal. Por ello, el brazo controlador de los gobiernos, incluso de los locales, puede alcanzar a la prensa nacional. He tenido la oportunidad de escribir, por ejemplo, en un diario de circulación nacional, y ser después excluido de sus páginas bajo el argumento de que el gobernador de mi estado se sentía molesto con mis escritos, un gobernador que invertía enormes cantidades de dinero en los medios nacionales (al igual que lo sigue haciendo el gobierno veracruzano actual). Muchos otros intelectuales públicos en México han sufrido la misma suerte, sobre todo en provincia. La intolerancia no es monopolio del PRI, sin embargo. También la prensa de izquierda me excluyó de sus páginas por no atenerme a sus propias líneas editoriales.

Es importante en este punto subrayar que la débil transición a la democracia no ha sido un proceso homogéneo en el tiempo y en el espacio. Veracruz, mi estado, que es el tercero más poblado de México, sigue siendo tan autoritario como 30 años atrás. De hecho podemos decir que el autoritarismo despótico local, revestido de democracia electoral, es hoy aún peor que antes en buena parte del país. México, como todos los países grandes de América Latina, se mueve a varias velocidades, y persisten nichos autoritarios de importancia mayor o menor, pero ultimadamente reales y que afectan la vida de millones de personas. Este es un dato fundamental de reconocer si hemos de orientar correctamente nuestra investigación y nuestro activismo. En México coexisten avances democráticos y prácticas autoritarias. El reto es lograr que los primeros venzan a las segundas.

No podría terminar este recuento sin reconocer las muchas deudas personales que tengo con mis seres queridos. Para empezar, fue mi padre quien me inculcó un sentido de la moralidad pública que 50 años atrás era verdaderamente excepcional. Mi padre, un médico veterinario militar al que le tocó trabajar con uno de los peores caciques político-militares posrevolucionarios, y que fue después funcionario público del estado desarrollista, fue inmune a la tentación de la corrupción y del poder. Preservó la dignidad y la decencia en una época y en un medio en donde ambas virtudes eran casi inexistentes. Su ejemplo de rebeldía, compartido por mi madre, fue mi poderosa escuela. Le debo mucho también a ambos por algo más mundano: el cariñoso cuidado que prodigaron a mis hijos durante mis frecuentes ausencias. En el mismo sentido, fue importantísima para mí la solidaridad y acompañamiento de la madre de mis hijos, Cristina Millán, a lo largo de

muchos años, seguramente los más difíciles. Estoy también en deuda con mis hijos Ameyali y Diego por su paciencia y amor incondicional. Y desde hace 14 años tengo la fortuna de recibir el cariño y el apoyo cómplice de Celia del Palacio, sin los cuales no habría hecho muchas de las cosas que les he narrado.

Agradezco, por fin, el otorgamiento de este premio y me siento honrado de estar acompañado en esta ocasión tan especial de muchos amigos, que son también, como yo, en sus respectivas esferas y países, activistas por la democracia y la justicia. Recibo este premio en nombre de ustedes y de los otros muchos colegas que están haciendo lo mismo de manera callada y menos afortunada que yo. Muchas gracias. ■